La UV pide medidas para evitar los guetos de alumnos inmigrantes en centros públicos - Levante - 03/05/2018

La UV pide medidas para evitar los guetos de alumnos inmigrantes en centros públicos

▶ Expertos en integración proponen establecer cuotas para los colegios, especialmente los concertados, o forzar la matriculación en el colegio más próximo ▶ Un 20,7 % de los alumnos valencianos de fuera no se sienten integrados

V. S. VALÈNCIA

■ Los expertos en integración alertan: los colegios públicos y, sobre todo, las líneas en castellano se están convirtiendo en guetos de alumnos inmigrantes en las aulas valencianas, lo que entorpece una integración real de la población migrante tanto en el ámbito escolar como, por ende, en el social. Esta es una de las conclusiones a la que llegan los expertos del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València en el informe jurídico-social que han publicado sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana.

En el extenso análisis (que aborda aspectos educativos, sanitarios, laborales o administrativos) se aportan medio centenar de propuestas concretas para revertir situaciones detectadas como el problema de la concentración de los alumnos migrantes en los centros educativos y que, por exclusión, hace que las aulas de los centros privados o concertados «no reproduzcan la composición de la sociedad por nacionalidades»: a 1 de enero de 2016 el 15,7 % de la población valenciana son personas nacidas fuera.

Los expertos en inmigración e integración consultados para realizar el informe lo tienen claro: los alumnos de origen extranjero se concentran en unos centros y en otros no, mayormente en los públicos. Según las estadísticas, en el curso 2015-2016, un 12 % del alumnado no universitario en la C. Valenciana era extranjero y ocho de cada diez (un 83 %) estaban matriculados en centros públicos muy por encima de la cifra del conjunto del alumnado: un 66,5 %.

Líneas en valenciano

La idea de que los alumnos extranjeros son un problema y que su presencia «comporta un retraso en el ritmo de aprendizaje», está tan extendida entre las familias «autóctonas» que, según especialistas en inmigración, los padres incluso optan por matricular a sus hijos en líneas en valenciano «para no mezclar con la población migrante» con la consecuencia directa de que se están «guetizando colegios y dentro de los colegios, unidades», según se recoge en el informe.

Como solución, desde el Instituto de Derechos Humanos de la UV proponen adoptar medidas «efectivas» para evitar estas tasas de concentración en determinados centros y que así se asegure que todos los financiados con dinero público, independientemente de su titularidad «integren la diversidad con normalidad» ya que la realidad actual evidencia, por un lado, «el rechazo y la discriminación» que hay hacia los alumnos extranjeros (uno de cada tres estudiantes actualmente es marroquí o rumano) y puede derivar en que en centros con fondos públicos «la diversidad esté ausente y los niños desaprendan a vivir con la diversidad».

Aunque no se incorporan entre las propuestas, en el informe sí se aportan ideas recogidas en encuestas y conversaciones con especialistas como establecer cuotas de población extranjera, especialmente en los concertados o forzar la matriculación en el colegio «más próximo», sin posibilidad de «huida» de centros con alta presencia de población inmigrante.

«Incómodos en el aula»

Los guetos para la población inmigrante sobre los que alerta el informe no ayudan a mejorar las cifras sobre integración escolar que también se exponen en el análisis. Según el informe PISA de 2015 de los que se hace eco este análisis jurídico-social, el 20,7 % de los alumnos extranjeros de la C. Valenciana no se sentían integrados y el 16,3 % decían sentirse «incómodos» y «fuera de lugar» en su centro escolar.

La tasa de integración de la Comunitat Valenciana, con un 0,14, se situaba entre las peores, solo por detrás de los datos recogidos en otros comunidades como Cataluña, Galicia o Baleares.

En el área educativa, el Instituto de Derechos Humanos de la UV también propone establecer medidas para mejorar el aprendizaje y «compensar las diferencias», además de que se incorpore la «perspectiva de la diversidad cultural» en la formación del profesorado.

Los especialistas advierten: los niños «desaprenden» a vivir con la diversidad, lo que dificulta la integración

La población inmigrante de la C. Valenciana en cifras

15,7 %

Población inmigrante en 2016

▶ El informe hace una extensa radiografía a la situación social del colectivo inmigrante en la C. Valenciana: 773.906 nacidos fuera según datos de enero de 2016. Aunque su distribución geográfica es irregular, los migrantes de Rumanía son los más numerosos con un 12 % de peso. Le siguen los británicos: un 10,2 % del total.

41 %

De nacionalizados son de Colombia, Francia y Ecuador

▶ De todas las nacionalidades, los migrantes sudamericanos son los que más se nacionalizan frente a los europeos o asiáticos. Los rumanos solo son el 0,69 %

26,3 %

Tasa de paro entre el colectivo inmigrante en 2016

▶ Según el informe cuando lo peor de la crisis económica había pasado y la tasa de paro entre la población autóctona había bajado al 17,9 %, superaba el 26 % entre los migrantes. La virulencia de la crisis ha sido «más intensa y más extensa» en la población extranjera.

50 propuestas para la integración

▶ El Instituto de Derechos Humanos de la UV pone objetivos para lograr la normalización.

Trabas municipales para inscribirse en el padrón

▶ La inscripción en el padrón municipal como residente es el paso inicial para el acceso a derechos básicos como el sanitario o el educativo se esté en situación regular o no en el país. En el informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València se alerta, en este sentido, de otra situación detectada en varios ayuntamientos valencianos: los problemas para inscribirse o la necesidad de dar cuenta a Extranjería del registro cuando, según la ley, no es condición necesaria para ella. Velar por el cumplimiento de la norma y por un acceso normalizado a los servicios y prestaciones públicas ocupa, de hecho, varias de las propuestas de mejora del informe que también se detiene en el problema del acceso a la sanidad pública. En este apartado, desde el organismo piden un pacto de Estado que garantice la cobertura sanitaria universal de todas las personas residentes, tengan o no papeles. Este pacto estaría contra el Real Decreto 16/2012, actualmente vigente, y que dejó fuera del sistema sanitario en toda España a los inmigrantes sin papeles, a no ser que fueran menores, embarazadas o tuvieran un accidente. El Consell ha intentado paliar su efecto con un Decreto ley de acceso universal a la sanidad gracias al que se dieron 13.822 tarjetas sanitarias que ahora está anulado por el Tribunal Constitucional. V. S. VALÈNCIA